**JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTE: SCM-JDC-
1628/2017

ACTOR: RICARDO VÁZQUEZ
CONTRERAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE:
ARMANDO I. MAITRET
HERNÁNDEZ

SECRETARIA: CESARINA
MENDOZA ELVIRA

Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de **sobreseer** en el juicio respecto de la Convocatoria y **confirmar**, en lo que fue materia de controversia, el acuerdo impugnado, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

Actor o promovente	Ricardo Vázquez Contreras
Acuerdo impugnado	Acuerdo INE/CG514/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos presentados por aspirantes
Autoridad responsable o Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Convocatoria	

Convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018

INE	Instituto Nacional Electoral
Juicio ciudadano	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
Ley Electoral	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sala Regional	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

De las constancias que integran el expediente, y de los hechos narrados por el actor en su demanda, se advierte lo siguiente:

I. Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano. El veintiocho de agosto del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017, relativo a los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano para el registro de candidaturas independientes. Dicho acuerdo se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el treinta y uno de agosto siguiente.¹

1. Disponible en el sitio de internet del Instituto:

<http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/09/CGex201708-28-ap-12.pdf>.

Este acuerdo fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495706&fecha=31/08/2017

II. Inicio del proceso electoral federal 2017-2018 y Convocatoria. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete,² el Consejo General declaró el inicio del proceso electoral federal, y aprobó el Acuerdo General INE/CG426/2017, por el que se emitió la Convocatoria,³ la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el veintinueve de septiembre siguiente.⁴

2. En adelante, las referencias a fechas se entenderán al año dos mil diecisiete, salvo otra precisión.

3. La cual fue modificada mediante sentencia de la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-872/2017, para prorrogar los plazos para la solicitud de intención de los candidatos independientes.

4. Consultable en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499458&fecha=29/09/2017

III. Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción. El cinco de octubre, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017, relativo a los Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido por el Registro de Candidaturas Independientes a cargos federales de elección popular.

IV. Modificación de Convocatoria. El mismo cinco de octubre, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, mediante el cual se modificaron las bases cuarta y quinta de la Convocatoria.

V. Solicitud de intención. El trece de octubre, el actor presentó ante la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México su manifestación de intención para postularse como candidato independiente a Senador por el Principio de Mayoría Relativa en la referida ciudad.

VI. Constancia de aspirante. El dieciocho de octubre posterior, la referida Junta Local expidió al actor la constancia de aspirante a candidato independiente a Senador en la Ciudad de México.⁵

5. Foja 83 del expediente.

VII. Acuerdo impugnado. El ocho de noviembre, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG514/2017 mediante el cual modificó los diversos INE/CG387/2017 y INE/CG455/2017, relacionados con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos presentados por aspirantes.

VIII. Juicio Ciudadano

1. Demanda. El diecisiete de noviembre, el actor interpuso demanda de juicio ciudadano ante el INE, a fin de controvertir el referido acuerdo INE/CG514/2017. El veintiuno siguiente, dicha demanda fue remitida a la Sala Superior de este Tribunal Electoral para su resolución, lo que dio origen al cuaderno de antecedentes 304/2017.

2. Remisión a esta Sala Regional. El veinticuatro de noviembre, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior remitió la demanda, el informe circunstanciado y demás constancias atinentes, al determinar que el medio de impugnación es competencia de esta Sala Regional.

3. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Regional, mediante acuerdo de la misma fecha, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley ordenó integrar el expediente SCM-JDC-1628/2017 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Armando I. Maitret Hernández.

4. Radicación. El veintiséis de noviembre siguiente, el Magistrado Instructor radicó el expediente.

5. Admisión y cierre. El veintinueve de noviembre, se admitió la demanda y se cerró instrucción, quedando el expediente en estado de dictar sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio promovido por un ciudadano aspirante a candidato independiente para al Senado por la Ciudad de México para combatir el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprobaron modificaciones relacionadas con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos presentados por aspirantes, lo que considera vulnera su derecho político electoral de ser votado; tipo de elección que actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones I y V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo 195, fracción IV, inciso b).

Ley de Medios. Artículos 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso b).

Además, el asunto fue remitido por la Magistrada Presidenta de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre, al determinar que el medio de impugnación es competencia de esta Sala Regional.

SEGUNDA. Precisión de los actos impugnados. De la lectura integral de la demanda, esta Sala Regional considera que el actor no sólo combate el acuerdo INE/CG514/2017 por el que el Consejo General aprobó modificaciones relacionadas con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y dio respuesta a los escritos presentados por aspirantes, sino que hace valer argumentos encaminados a controvertir la Convocatoria y la funcionalidad de la aplicación móvil para obtener el apoyo ciudadano.

En efecto, de la demanda es posible advertir que el actor señala que los requisitos establecidos en la Convocatoria, en específico la previsión de la obtención del apoyo de la ciudadanía mediante una herramienta tecnológica, la aplicación móvil, es discriminatoria e inequitativa.

De igual forma, señala que la Convocatoria condiciona su participación a reglas que se contraponen a los principios y directrices del sistema constitucional mexicano.

En ese sentido, es que esta Sala Regional llega a la conclusión de que el actor no sólo expresa agravios para combatir el acuerdo INE/CG514/2017, sino que también expresa argumentos en contra de la Convocatoria y de la aplicación móvil "Apoyo Ciudadano", por lo que, en la presente sentencia se tendrán como actos impugnados tanto el acuerdo mencionado en primer término, como la Convocatoria y la aplicación móvil.

TERCERA. Sobreseimiento. Esta Sala Regional estima que el presente medio de impugnación debe sobreseerse, por lo que hace a la Convocatoria, en razón de que su presentación fue extemporánea, tal como se expone a continuación.

En primer término, el artículo 11, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, establece que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otras razones, cuando no se presenten dentro de los plazos establecidos en esa ley.

A su vez, el artículo 74 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral señala que cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 11 de la Ley de Medios y la demanda haya sido admitida, procederá el sobreseimiento del medio de impugnación.

Lo anterior, porque en términos del artículo 8 de la citada Ley, los medios de impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o **se hubiere notificado de conformidad con la ley aplicable**.

En este sentido, de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Medios se advierte que, cuando la violación reclamada se produzca durante la celebración de un proceso electoral y el acto esté vinculado con dicho proceso, el cómputo de los plazos se hará considerando todos los días como hábiles.

En el caso, como quedó precisado con antelación, el actor hace valer algunos agravios en contra de la Convocatoria, en particular por estimar que lo establecido para la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía mediante una aplicación móvil vulnera sus derechos político electorales.

En contra de ese acto de aplicación legal, el actor considera que el INE ha implementado un esquema de participación que obstaculiza el cumplimiento real y material de los requisitos para contender como candidato independiente. En ese sentido, el promovente considera excesivo, irracional, discriminatorio e inequitativo el cumplimiento de requisitos extremos previstos para las candidaturas independientes, como es el 2% de la lista nominal de electores de firmas de apoyos ciudadanos.

En ese tenor, el promovente estima que le causa agravio que no se considere el principio *pro homine*, al condicionar su participación con la Convocatoria, la cual se contrapone a los principios y directrices del sistema constitucional mexicano.

Cabe precisar que el veintiocho de agosto del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017, relativo a los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano para el registro de candidaturas independientes. Dicho acuerdo se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el treinta y uno de agosto siguiente.

Asimismo, el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió el acuerdo INE/CG426/2017, por el que se aprobó la Convocatoria, mientras que el referido acuerdo fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el veintinueve de septiembre siguiente.

A la fecha de la presentación del juicio ciudadano, el diecisiete de noviembre del presente año, habían transcurrido cuarenta y nueve días desde la publicación de la Convocatoria en el *Diario Oficial de la Federación*.

Asimismo, cabe señalar que, aun en el caso más benéfico para el actor, tomando como acto de aplicación de la Convocatoria el momento en que el actor obtuvo su registro como aspirante a candidato independiente, su demanda también resulta extemporánea.

Lo anterior es así, ya que al actor refiere que obtuvo la calidad de aspirante el dieciocho de octubre, por lo que es a partir de dicho momento en que se concretiza la aplicación de la normatividad que impugna, pues es al situarse en el supuesto normativo de aspirante, es que se encuentra obligado a cumplir con la normatividad relativa.

De esta manera, el plazo para impugnar la normatividad que le resultaba aplicable, en el mejor de los casos, ocurrió el dieciocho de octubre, mismo que concluyó el veintidós de octubre siguiente.

En este sentido, si el actor presentó su demanda de juicio ciudadano hasta el diecisiete de noviembre, es notoria su extemporaneidad.

Por tanto, y toda vez que el presente juicio ya se admitió, éste debe sobreseerse respecto de la impugnación de la Convocatoria, puesto que ésta no fue impugnada oportunamente.

Similar criterio fue sostenido por esta Sala Regional en los SCM-JDC-1342/2017 y SCM-JDC-1355/2017, y por la Sala Superior de este Tribunal en el SUP-JDC-989/2017.

Inclusive, sobre los temas que se queja el actor ha habido pronunciamiento de su constitucionalidad, tanto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, como por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el SUP-JDC-841/2017 y acumulados, lo que en concepto de esta Sala Regional supera cualquier objeción al respecto por parte del actor.

Finalmente, toda vez que esta Sala Regional está imposibilitada para analizar de fondo los planteamientos del actor relacionados con la Convocatoria, en particular la supuesta vulneración de sus derechos político electorales por la implementación de una aplicación móvil para la obtención del apoyo de la ciudadanía, se considera innecesaria la admisión de la inspección ocular ofrecida como prueba en el escrito de demanda y cuyo pronunciamiento se había reservado para esta etapa procesal.

CUARTA. Procedencia del juicio en contra del acuerdo INE/CG514/2017. Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8; 9, párrafo 1; 79, párrafo 1, y 80 de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:

a) Forma. El requisito en estudio se cumple porque la demanda se presentó por escrito y en ella se hace constar el nombre y firma autógrafa del actor, así como los demás requisitos legales exigidos.

b) Oportunidad. Este requisito se considera satisfecho, toda vez que el actor señala como fecha de conocimiento del acuerdo impugnado el quince de noviembre del año en curso, sin que la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, hubiera controvertido tal manifestación o hecho valer causal de improcedencia relacionada con la oportunidad de la demanda; de ahí que, si la demanda fue presentada el diecisiete de noviembre de este año, es evidente que la misma se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley de Medios.

c) Legitimación. El actor tiene legitimación para promover el medio de impugnación, porque es un ciudadano que promueve por propio derecho y en forma individual, haciendo valer presuntas violaciones a su derecho político electoral de ser votado, en razón de lo considerado en el citado acuerdo, dada su calidad de aspirante a candidato independiente al Senado por la Ciudad de México, carácter que se encuentra acreditado con la copia de la constancia de aspirante a la referida candidatura que se encuentra en el expediente;⁶ aunado a que la autoridad responsable le reconoce dicha calidad.

6. Visible a foja 83 del expediente.

d) Interés jurídico. El actor cuenta con interés jurídico procesal para promover el juicio ciudadano, porque controvierte un acuerdo emitido por el Consejo General del INE por el que se aprobaron modificaciones relacionadas con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos presentados por aspirantes.

Al respecto, el actor aduce que le genera una vulneración a su derecho político electoral de ser votado como candidato independiente al Senado por la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa, por lo que cuenta con acción procesal para defender su derecho.

e) Definitividad. El acuerdo impugnado es definitivo y firme debido a que la legislación electoral federal no prevé un medio de impugnación procedente para modificarlo o revocarlo.

En consecuencia, al estar colmados los requisitos de procedencia del medio de impugnación, lo procedente es estudiar los agravios expresados en la demanda.

QUINTA. Estudio de fondo

Agravios relacionados con el acuerdo impugnado (INE/CG514/2017)

El promovente refiere que le causa agravio el acuerdo impugnado, específicamente en el numeral 30, relacionado con la negativa a la solicitud del representante legal de "Reacción efectiva, A.C.", relacionada con acondicionar y facilitar en cada una de las Juntas Locales y Distritales, en los Organismos Políticos Locales Electorales (OPLES) y en los módulos de atención del INE, un equipo electrónico para que la ciudadanía acuda a registrar sus firmas a los aspirantes.

Al respecto, señala que la respuesta de la autoridad responsable es desproporcional e irracional al referir que no es posible atender favorablemente dicha solicitud, pues no está

permitido el uso de recursos públicos para la etapa de obtención de apoyos de la ciudadanía.

Es desproporcional al no considerar el gasto que realizan los partidos políticos cuando se trata de buscar el apoyo de la ciudadanía, pues el INE no da razones ni argumentos de por qué los partidos políticos sí pueden acceder a recursos públicos para esos fines, ni refiere qué tipo de derechos son maximizados con esa limitante.

En tal sentido, solicita la inaplicación de diversos acuerdos del Consejo General y los artículos de la Ley Electoral que se opongan de manera irracional al ejercicio pleno del derecho humano de ser votado. Esos acuerdos son: INE/CG203/2014, INE/CG13/2015, INE/CG725/2016, INE/CG409/2017, INE/CG386/2017, INE/CG475/2017, INE/CG476/2017 y INE/CG514/2017.

Aunado a lo anterior, el actor señala que el acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación en el referido numeral, pues la aplicación móvil, creada por el INE, fue pagada con recursos públicos, por lo que su respuesta resulta incongruente e ilegal.

Respuesta

Esta Sala Regional considera que **no le asiste la razón** al actor como se explica a continuación.

Cabe precisar que los argumentos hechos valer por el actor están encaminados a combatir la respuesta dada a una solicitud presentada por una tercera persona, aun cuando con ello estima que se le afecta un derecho, dado que la autoridad debe instalar los equipos que solicitaron.

De la lectura del acuerdo impugnado, se advierte que el numeral 30 a que se refiere el actor, es la respuesta que da la autoridad responsable a la solicitud presentada por el representante legal de "Reacción Efectiva, A.C.", asociación civil distinta a la que apoya al promovente.

En efecto, de las constancias del expediente se advierte que la asociación civil que apoya la candidatura independiente del actor se denomina "Casa de la Democracia Ciudad de México, A.C."

No obstante lo anterior, la respuesta que pretende combatir el actor se refiere a una cuestión que, en la óptica del actor pudiera afectar a todas las personas que aspiran a una candidatura independiente, pues da respuesta a la solicitud de acondicionar y facilitar, en cada Junta Local y Distrital, así como en los OPLES y en los módulos de atención del INE, un equipo electrónico para que la ciudadanía acuda a registrar sus firmas de apoyo a dichos aspirantes.

Ahora bien, esta Sala Regional considera que no le asiste la razón actor, porque, contrario a lo que sostiene, la autoridad responsable funda su respuesta en lo previsto en los artículos 369, párrafo 1; 370, y 374, párrafo 1, de la Ley Electoral, relativos a los actos que pueden realizar los aspirantes a alguna candidatura independiente para la obtención del

apoyo de la ciudadanía y a que éstos se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado.

Asimismo, el INE señaló que la razón de la negativa atendió a que, dado lo previsto en los citados preceptos, no es posible utilizar recursos públicos para la obtención de tales apoyos, por lo que la disposición de las oficinas del INE para ello implicaría el uso de recursos públicos. En ese sentido, el acuerdo impugnado sí está fundado y motivado.

Ahora bien, respecto a que el actor señala que es desproporcional en tanto que los partidos políticos sí reciben recursos públicos, esta Sala Regional considera que tampoco le asiste la razón al actor.

En primer lugar, es incorrecta la apreciación del actor de que los partidos reciben, en esta etapa, financiamiento para la obtención de apoyos, pues los procesos de selección de candidaturas en los partidos obedece a otra lógica, y su financiación para actividades ordinarias permanentes está prevista así en la Constitución y la ley, por lo que no puede haber trato desigual a dos entidades que son distintas.

En efecto, la naturaleza y fines de los partidos políticos es distinta a la de los candidatos independientes. Los partidos políticos, como entes de interés público constituyen los instrumentos idóneos de la participación política de la ciudadanía, haciendo posible el acceso de ésta al poder, para lo cual se requiere representatividad, **continuidad y permanencia**, acorde con el artículo 41 de la Constitución.

Por su parte, las candidaturas independientes, aunque también se trata de una forma de acceso al poder, su obtención de apoyos atiende a acreditar la legitimidad que deben tener las personas que aspiren a ocupar cargos de elección popular, cuya representación deberá contar con un respaldo mínimo al tratarse de cargos electos por el principio de mayoría relativa.

La Suprema Corte ha sostenido, en cuanto a que los candidatos independientes cuenten con recursos públicos únicamente durante las campañas, que ello no provoca inequidad con los partidos políticos que gozan de prerrogativas para la obtención del voto en los procesos electorales, precisamente porque esa situación obedece a la naturaleza y fines de ambos sujetos jurídicos, pues las candidaturas independientes no cuentan con la permanencia de un partido político y, en ese sentido, no debe dárseles el mismo trato.⁷

7. Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 49/2014 y acumulados.

Al respecto, es importante precisar que los partidos políticos tampoco reciben recursos públicos en esta etapa del proceso electoral para la obtención del voto o de apoyo de la ciudadanía, pues éste les es asignado hasta el año en que se llevará a cabo la elección de que se trate, tal y como lo establece el artículo 41, base II, de la Constitución.

En razón de ello, es que no le asiste la razón al actor. Aunado a que la implementación de la aplicación móvil por el INE, no puede considerarse que se estén destinando recursos públicos para la obtención de los apoyos ciudadanos, pues la referida aplicación es una

herramienta tecnológica creada para facilitar y mejorar la obtención de apoyos, tal y como lo sostuvo la Sala Superior en la sentencia del juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados.

Si bien la aplicación móvil en cuestión fue creada por el INE mediante la utilización de recursos públicos, lo cierto es que ésta herramienta tiene como fin facilitar las acciones relacionadas con la obtención del apoyo de la ciudadanía tanto para los aspirantes a alguna candidatura independiente como para autoridad electoral en relación con la verificación de la autenticidad de los apoyos recabados por cada aspirante.

En este sentido, esta Sala Regional considera que la creación de dicha herramienta no puede considerarse como uso de recursos públicos para actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, para un aspirante a una candidatura en particular, sino como para que todos se beneficien de su uso; de ahí que la incongruencia e ilegalidad alegada por el actor no sea cierta.

Por ello, es correcta la conclusión a la que arriba la autoridad responsable, en relación con la solicitud hecha, máxime si se considera que el artículo 374 de la Ley Electoral señala que **los actos tendentes** a recabar apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados, lo que no implica que no puedan utilizarse herramientas tecnológicas que implemente la autoridad electoral como un medio para obtener dicho apoyo, es decir, no se trata de un acto o actividad en la que se haya utilizado recursos públicos por algún candidato independiente en particular, pues hacer lo que pide el actor no estaría amparado por dicho precepto porque sí significaría la utilización de recursos públicos para una candidatura determinada.

En ese tenor, el actor no puede alcanzar su pretensión en cuanto a su **solicitud de que se implemente una plataforma a su nombre** para la obtención de los apoyos de la ciudadanía, en principio, porque ello sí implicaría que el INE destinara recursos públicos exclusivamente para que un candidato independiente en lo individual obtenga los apoyos necesarios para cumplir con el requisito en cuestión, con lo que se le daría un trato diferenciado respecto de los demás aspirantes.

Por otra parte, se debe considerar que los lineamientos para la obtención de apoyos de la ciudadanía se aprobaron desde la emisión del acuerdo INE/CG387/2017 (veintiocho de agosto), en el que se previó el uso de la aplicación móvil como el mecanismo que debe utilizarse para ello.

Asimismo, las únicas excepciones del uso de dicha aplicación, se refieren a aquellos lugares de extrema pobreza, cuyo listado se encuentra como anexo en el acuerdo impugnado, o algún desastre natural. En el caso, el actor no solicita que se le aplique alguna de estas excepciones al uso de la aplicación móvil, sino que pretende no usarla en absoluto y contar con un mecanismo hecho a su medida, lo que se encuentra fuera de toda legalidad.

Por lo que hace a la solicitud de inaplicación de diversos acuerdos del INE y de las disposiciones de la Ley Electoral que se opongan a la pretensión del actor es **inatendible**, pues se limita a enlistar diversos acuerdos del INE sin precisar las razones por las que

solicita su inaplicación, y de manera genérica señala que deben inaplicarse en lo que se opongán a su pretensión. Sin embargo, como ha quedado expuesto, el actor no puede alcanzar su pretensión, al haber resultado infundados e inoperantes sus agravios.

Finalmente, el planteamiento relativo a las supuestas fallas de la aplicación móvil en el periodo señalado por el actor es **inoperante**, toda vez que se tratan de manifestaciones subjetivas, genéricas e ineficaces al limitarse a decir de forma generalizada que las fallas de la aplicación le impiden recabar el apoyo ciudadano, por los teléfonos con poca capacidad de almacenamiento, sin dar mayores elementos sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Sentido de la sentencia

Al resultar **infundados e inoperantes** los agravios formulados por el actor, se debe **confirmar**, en lo que fue materia de controversia, el acuerdo impugnado.

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** el juicio respecto de los planteamientos en contra de la Convocatoria.

SEGUNDO. Se **confirma**, en lo que fue materia de controversia, el acuerdo impugnado.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor; por **correo electrónico**, con copia certificada de la sentencia, a la autoridad responsable, y por **estrados** a los demás interesados.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **mayoría** de votos, los Magistrados y la Magistrada, con el voto particular del Magistrado Romero Bolaños; en el entendido de que la Licenciada María de los Ángeles Vera Olvera funge por Ministerio de Ley, con motivo de la ausencia justificada de la **Magistrada María Guadalupe Silva Rojas**, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien **autoriza y da fe**.

Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS, RESPECTO DE LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM-JDC-1628/2017.⁸

8. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 48 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. Colaboraron en este voto Mónica Calles Miramontes y Emmanuel Torres García.

Con el debido respeto me permito disentir del criterio sustentado en la sentencia aprobada por la mayoría,⁹ porque estimo que procedía realizar el estudio de la constitucionalidad del sistema para la obtención del apoyo de la ciudadanía mediante la aplicación móvil en la Ciudad de México hecho valer por el Actor.

9. En el presente voto particular seguiré los términos definidos en el glosario que se encuentra al inicio de la sentencia.

En la sentencia, la mayoría se decantó por confirmar el Acuerdo impugnado, al considerar fundamentalmente que eran inoperantes e inatendibles los agravios, sin entrar al análisis del motivo de disenso en que el Actor solicita se declare la inconstitucionalidad de los acuerdos que establecen la previsión de la obtención del apoyo de la ciudadanía mediante una herramienta tecnológica -la aplicación móvil- la cual considera discriminatoria, excesiva, irracional e inequitativa, ya que implica la erogación de recursos económicos para poder acceder a teléfonos móviles con las características necesarias para el adecuado funcionamiento de la mencionada aplicación.

La inoperancia sostenida por la mayoría, de acuerdo con lo razonado en la sentencia, radicó en que la pretensión del Actor es inatendible, pues se limita a enlistar diversos acuerdos del INE sin precisar las razones por las que solicita su inaplicación; en este sentido, se afirma en la sentencia que los lineamientos para la obtención de apoyos de la ciudadanía se aprobaron en el acuerdo INE/CG387/2017, que previó el uso de la aplicación como el mecanismo a utilizarse para ello y que, las únicas excepciones de su uso se relacionan a aquellos lugares de extrema pobreza o algún desastre natural.

En el caso, el Actor no solicita que se le aplique alguna de estas excepciones al uso de la aplicación móvil, sino que pretende el análisis de la constitucionalidad de la implementación de la aplicación móvil como única opción.

No comparto las consideraciones sostenidas por la mayoría, porque las alegaciones hechas valer por el Actor están dirigidas destacadamente a cuestionar la constitucionalidad del sistema de obtención de apoyo de la ciudadanía únicamente mediante la aplicación móvil, al estimar que se violenta en su perjuicio el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el régimen de excepción se determinó tomando como base los municipios catalogados con un índice muy alto de marginación por el Consejo Nacional de Población, así como aquellos donde se hubiera declarado una situación de emergencia con motivo de desastres naturales, sin contemplar las circunstancias de sectores vulnerables de la sociedad, como son el de las personas que se encuentran en una condición de discapacidad y el de las personas adultas mayores, a los cuales se les dificulta el uso de la aplicación.

En consecuencia, estimo que si bien el Acuerdo no se impugnó en su momento, se está combatiendo con motivo de su aplicación, puesto que es precisamente al momento en que se están recabando los apoyos de la ciudadanía a través de la aplicación, que se pueden advertir las circunstancias que –a juicio del Actor– generan un impacto en la obtención de dicho apoyo, acarreando la aducida vulneración al principio de igualdad.

Aunado a lo anterior, estoy convencido de que el Acuerdo impugnado (**INE/CG514/2017**), finalmente también se ocupó de dar respuesta a diversas **solicitudes de ampliación del régimen de excepción para recabar el apoyo de la ciudadanía en papel**,¹⁰ de tal suerte que los términos en los que éste fue aprobado los tornan en un mandato y una obligación para el Actor respecto al uso de la aplicación móvil para conseguir el apoyo de la ciudadanía en la Ciudad de México.

10. Como se advierte de las fracciones IX y XVI, del apartado de ANTECEDENTES del Acuerdo impugnado.

En consecuencia, a partir de esa determinación, también se genera un nuevo acto de aplicación de ese mecanismo de obtención del apoyo de la ciudadanía. En tal virtud, en concepto del suscrito resultaba procedente realizar el análisis de constitucionalidad planteado, pues tal circunstancia es posible tantas veces como se genere un acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

Lo anterior resulta acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia **35/2013**,¹¹ de rubro y texto siguientes:

11. Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 46 y 47.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN.—De conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, en cuyas sentencias los efectos se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y resolución de los citados órganos jurisdiccionales, lo que no permite los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora bien, conforme al sistema integral de medios de impugnación en la materia, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad; en este orden de ideas, es conforme a Derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional por las Salas del Tribunal Electoral, tantas veces como sean aplicadas; por tanto, la aludida facultad de las Salas se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca que solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación.

(Énfasis añadido)

No es obstáculo a lo anterior, que la Sala Superior se hubiera pronunciado respecto a la constitucionalidad del señalado mecanismo, toda vez que conforme a la citada jurisprudencia, el control de constitucionalidad se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma que se cuestiona, pues el señalado control en la materia electoral está diseñado para atender cada caso en concreto, aunado a que los motivos de agravio analizados por ese órgano jurisdiccional en aquél momento versaron sobre temáticas relacionadas con la etapa previa a su utilización, mientras que en el caso, la herramienta cuestionada ya se encuentra en uso.

Por tanto, a mi consideración procedía realizar el mencionado estudio del mecanismo cuestionado en este momento.

Por las razones expuestas, es que estimo que ese análisis debió realizarse como cuestión primordial y de carácter preferente respecto a los demás motivos de agravio hechos valer por el Actor.

Por lo hasta aquí expuesto y fundado, es que formulo el presente **voto particular**.

MAGISTRADO

HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS